



Minvu sostendrá hoy reunión clave con los dueños del predio:

Figuras del PC presionan al Gobierno para evitar desalojo de megatoma en San Antonio

La diputada Lorena Pizarro dijo que “desde luego” no está de acuerdo con esa medida, y señaló que los dueños de los terrenos usurpados “tienen que abandonar esta lógica de hacer negocio con todo”.

MAURICIO SILVA y BENJAMÍN COURT

El ex director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu) durante el gobierno de la Unidad Popular y Premio Nacional de Arquitectura 2019, Miguel Lawner, y el ex precandidato presidencial Daniel Jadue, son dos de las figuras del Partido Comunista que han anunciado que se harán presentes este jueves en la megatoma de San Antonio si fracasan los intentos del Gobierno por lograr un acuerdo entre los dueños de los terrenos y los protagonistas de la toma y, por tanto, se concreta el desalojo en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema.

Ambos personeros se muestran críticos de las negociaciones que el Ministerio de Vivienda lleva a cabo con los propietarios —a los que busca persuadir de venderles directamente las más de 200 ha del terreno a sus usurpadores, organizados en cooperativas— y son partidarios de que el Gobierno derechamente expropie ese gran paño.

“Aquí se echa de menos a un líder latinoamericano que habría gritado ‘expropiése’, porque efectivamente esto no puede ser”, dijo días atrás Jadue, quien debería pedir autorización judicial para viajar a San Antonio ya que se encuentra bajo arresto domiciliario. Lawner, en dichos reproducidos por La Tercera, cuestionó que el Gobierno “esté exigiendo un doble esfuerzo económico a personas de escasos recursos. Primero, aportar para ser parte de una cooperativa. Y luego, financiar la instalación de calles, alcantarillado, agua potable y electricidad. Es una carga impagable”. También dijo que en caso de desalojo “nos vamos a defender”.

Ayer, otras figuras de esa colectividad expresaron su oposición a un eventual desalojo, el que debería empezar a concretarse el jueves si es que no hay



INQUIETUD.— Un ambiente de expectación se vive en el macrocampamento en relación al acuerdo que se pueda alcanzar hoy entre los dueños y las autoridades. La mayoría de las familias se están integrando a las cooperativas, pero muchas optan por exigir que el Gobierno compre el predio.

AL MEDIODÍA El empresario Ricardo Posada y el ministro Montes encabezan la cita en busca de una salida.

acuerdo entre las partes.

“Tomarse terrenos es una de esas formas que a quienes primero no les gusta hacerlas es a los pobladores que recurren a ellas para mejorar su calidad de vida. Desde luego, no estoy de acuerdo con un desalojo”, expresó a “El Mercurio” la diputada PC Lorena Pizarro.

La parlamentaria, en todo caso, no desautorizó las gestiones en que está empeñado el Gobier-

no, aunque considera incierto su resultado. “Hay que buscar una solución. Primero los dueños de los terrenos tienen que abandonar esta lógica de hacer negocio con todo. Y segundo, veo con preocupación que se acerca la fecha y no se logra resolver un tema que se debe hacer a escala humana”, añadió.

Por su parte, el exministro de Desarrollo Social y militante PC, Marcos Barraza, expresó que “la orden de desalojo evidencia una colisión entre el derecho a la propiedad privada, sin omitir la especulación que se hace con su valor, y la legítima reivindicación del derecho a la vivienda y a la protección de familias vulne-

rables. De ahí que competa al Gobierno dar todas las garantías para brindar una solución a este conflicto, que ponga al centro el bienestar de las familias”, dijo.

A diferencia de Pizarro, Barraza incluso fue más enfático en respaldar el esfuerzo del Ejecutivo. “Dentro de sus competencias, ha respondido con celeridad a este conflicto, tanto para coordinar el trabajo con las familias, mediante la promoción y creación de las cooperativas, como proponiendo opciones económicas que posibiliten la adquisición del terreno”, puntualizó. Añadió que, pese a que las autoridades admiten que carecen de los recursos que la senten-

cia les ordenó disponer, estas han dispuesto recursos de emergencia para acoger a los eventuales desplazados, proteger a niños y adultos mayores y han instruido a la policía no amparar la demolición de casas o cercos.

Claves de la cita

Para poder comprar el terreno, el ahorro que debe alcanzar en seis meses cada socio de las cooperativas es de \$12 millones, pagando una cuota inicial de \$200 mil, comentó Karina Ayala, presidenta del comité Nuevos Aires de la megatoma. “La delegada del Minvu Gloria Mairra dijo que el que no participaba

en las cooperativas tenía que sacar sus cosas e irse del campamento. En base a eso, casi todas las dirigencias optaron por este camino y ya hay 46 cooperativas”, dijo Ayala, quien de todas formas se mostró esperanzada en que se logre una solución.

El topógrafo Gustavo Sepúlveda, que asesora a otro grupo de dirigentes, puntualizó que el monto a ahorrar dependerá de los costos de cada lote, que oscilan entre \$12 y \$14 millones en espera de una última tasación que a última hora recibiría el Minvu.

Para el urbanista Iván Poduje, este ahorro solo cubriría el 10% del valor que está exigiendo el propietario del predio, a lo que hay que sumar que son cientos las familias que se niegan a integrarse al plan, pues exigen que el Estado compre el predio, opción que es descartada por el Minvu, y a los pocos ingresos y capacidad de ser sujeto de crédito que tienen los ocupantes por su vulnerabilidad socioeconómica.

El abogado de los propietarios, Diego Pereira, expresó ayer la disposición de sus clientes a llegar a un acuerdo en la reunión que tendrán al mediodía con Montes y Cordero. Las claves de ello pasan por coincidir en torno al valor a pagar por el predio, que el dueño estima en 0,69 UF el m²; que se aclare el mecanismo financiero al que accederán las cooperativas; y de qué modo el Estado actuará como aportante o garante en ello, y aclarar si la totalidad de las familias ocupantes se están incorporando a esta estrategia.

“Vamos con disposición de lograr un entendimiento con el Gobierno y evitar que el desalojo se materialice. Pero tampoco vamos a aceptar que se imponga cualquier modalidad. Naturalmente que si no llegamos a acuerdo, instaremos a que se cumpla la sentencia”, expresó.

En caso de que prevalezca el desalojo, el abogado lamentó los llamados a la “desobediencia civil” para resistirlo, porque son “una flagrante vulneración al Estado de Derecho”.